

RESOLUCIÓN N° 19 /

SANTIAGO, 25.NOV.009

VISTOS:

1. El Principio de Probidad Administrativa y Transparencia establecido en el artículo N° 8 de la Constitución Política de la República.
2. Ley 20.285, sobre Acceso a Información Pública y la regulación que contempla el ejercicio del derecho a acceder a información pública.
3. La Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.
4. El Decreto Supremo N° 13, de fecha 02.MAR.009, que establece el Reglamento de la Ley 20.285 sobre Acceso a Información pública.
5. La Ley 18.575, Orgánica Constitucional Sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
6. La solicitud presentada por don **Roberto Daniel Freeman Cáceres**, cuyo número de folio asignado por el Sistema de Gestión de Solicitudes fue **AD010C-0000049**, de fecha 03.NOV.009, por medio del cual solicita se le informe si el señor **Jorge Luis Patricio VALDIVIA RODRIGUEZ**, Cédula Nacional de Identidad N°4.767.520-5, registra antecedentes policiales, órdenes de aprehensión y/o de arraigos pendientes dictados en su contra, con indicación del juzgado y número de rol.
7. Acompaña a su solicitud, Poder Especial autorizado ante Notario Público, con fecha 02.NOV.009, por medio del cual **Jorge VALDIVIA RODRIGUEZ**, confiere Poder Especial al abogado don **Roberto FREEMAN CÁCERES**, a objeto que lo represente ante la Policía de Investigaciones de Chile y/o Carabineros de Chile, con la finalidad de requerir los antecedentes policiales del mandante y realizar en su nombre y representación todo cuanto sea menester en relación con esos antecedentes o informes.

CONSIDERANDOS:

1. Que, la Ley 18.575, Orgánica Constitucional Sobre Bases Generales de la Administración del Estado, establece en su artículo N° 13, inciso 3°, que "*Son públicos los actos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial*", y en su inciso 5° que "*La información que no se encuentre a disposición del público de modo permanente, el interesado tendrá derecho a requerirla por escrito al jefe del servicio respectivo*".
2. Que, la Ley 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, define en su artículo N° 2, letra f) como Datos de Carácter Personal o Datos Personales, "*Los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables*" y en su letra ñ) como Titular de los Datos "*La persona natural a la que se refiere los datos de carácter personal*".

3. Que, la Ley 19.628, dispone en el Título IV denominado "Tratamiento de los Datos por los Organismos Públicos", en su artículo N° 20 que "El tratamiento de los datos personales por parte de un organismo público, sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con la sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular".

4. Que, la Ley 19.628 en su artículo N° 7 señala que "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, estarán obligados a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo, sobre los demás actos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo".

5. El Decreto Ley N° 2460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, establece como misiones de este servicio público, contenidas en su artículo 5 del citado cuerpo legal, las siguientes: "Corresponde en especial a la Policía de Investigaciones de Chile, contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública, prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes emanadas del Ministerio Público para los efectos de la investigación, así como las órdenes emanadas de las autoridades judiciales, y de las autoridades administrativas en los actos que intervengan como tribunales especiales; prestar su cooperación a los tribunales con competencia en lo criminal; controlar el ingreso y la salida de personas en el territorio nacional; fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país; representar a Chile como miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y dar cumplimiento a otras funciones que le encomienden las leyes".

En cumplimiento de estas misiones, los funcionarios de la Institución, de acuerdo a lo que dispone la segunda parte del inciso 1 del artículo 7° de la misma norma legal, deberán en el auxilio a las autoridades judiciales, cumplir sin más trámites sus órdenes y no podrán calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.

6. La Ley 20.285, que regula el Derecho de Acceso a Información Pública, establece las únicas causales de secreto o reserva, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: letra a) si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de u crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales", según lo dispone el artículo 21 N° 1 de la citada ley.

En efecto, la base de datos que la Policía de Investigaciones mantiene, tiene por objetivo, reunir en una sola fuente las órdenes judiciales que se recepcionan en este servicio, las que deben ser cumplidas por la Institución, al tenor de lo ordenado por la autoridad judicial.

Atendido lo expuesto, el conocimiento del contenido de la base de datos que maneja la Institución, donde se reúnen para su cumplimiento, diversas órdenes judiciales, impediría que consiguiera el fin de que dan cuenta, eludiendo el requerido y consultante de la base de datos, la persecución penal, lo que iría en desmedro de la misión y de los objetivos de la Policía de Investigaciones.

La órdenes judiciales que mantiene la PDI en sus registros, son para cumplirse en los términos dispuestos por la autoridad judicial, de modo que ese registro, no es de mero conocimiento o sólo informativo, a modo de notificación o comunicación, para aquellos que se verían afectados por la medida.

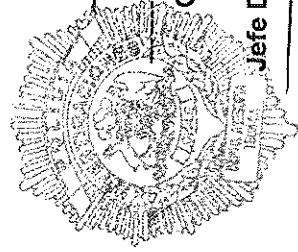
7. Que, conforme a lo anterior, la información contenida en los archivos de éste organismo público, referentes a órdenes de aprehensión, arraigo y arrestos vigentes, no será proporcionado a quien lo solicite, si la divulgación, comunicación o publicidad de la misma, afecte las funciones de la PDI.

RESUELVO:

1. En consecuencia, según lo razonado precedentemente, se niega el acceso a la información solicitada por el peticionario don **Roberto FREEMAN CÁCERES**, determinándose el secreto o reserva de la información requerida, conforme al artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley 20.285 sobre Acceso a Información Pública, y artículo N° 7 de la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, por cuanto la información relativa a órdenes de aprehensión, arraigos y arrestos vigentes, no será proporcionada a quién lo solicite, si su publicidad, comunicación o conocimiento de la misma, afecte las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile, provocando desmedro en sus funciones de prevención, investigación y de persecución de crímenes o simples delitos o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

2. Notifíquese la presente Resolución al peticionario, a través del correo electrónico indicado en formulario, rffreemanc@yahoo.com

Saluda a Ud.,



German Menéndez Gajardo

GERMAN MENDEZ GAJARDO

Subprefecto

Jefe Departamento de Asesoría Técnica